

## DIARIO



## OFICIAL

## DEL MINISTERIO DE MARINA

Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.

Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.

**Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.**

**Colección Legislativa: Trimestre, 15 pesetas; semest. 30 pesetas; año, 60 pesetas.**—Los suscriptores a la C. L. recibirán gratis el DIARIO OFICIAL.

## SUMARIO

## Sección oficial.

## Disposiciones ministeriales.

**MINISTERIO DE HACIENDA.**—Relativa a la cuantía que debe retenerse a los militares por alimentos en los pleitos de divorcio, y requiriendo a los Ministerios de Justicia, Guerra y Marina para que aclaren el alcance de la disposición final de la ley del Divorcio.

**SECCION DE PERSONAL.**—Destino a un cabo de marinería.

**SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.**—Ascenso de varios ayudantes auxiliares.

**SECCION DE MAQUINAS.**—Concede licencia al capitán maquinista don J. Permy.

**SECCION DE SANIDAD.**—Ascenso del oficial tercero de auxiliares de Sanidad don S. Cabundi.—Resuelve instancia de un auxiliar de Sanidad.

**SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.**—Nombra ingeniero industrial de la Inspección General de Buques y Construcción don J. Gómez.—Concede licencia a un auxiliar de oficinas.—Resuelve recurso a D. J. Cimiano.

## Sección oficial

## ORDENES

## MINISTERIO DE HACIENDA

Excmo. Sr.: Don Enrique Chaves Rodríguez, capitán retirado de Infantería, ha solicitado de la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas que, al dar cumplimiento a la orden de retención de sus haberes dictada por el Juzgado de primera instancia e instrucción número 4, de esta capital, como consecuencia de lo acordado en el juicio de divorcio seguido contra dicho señor por su esposa doña María Luisa Santos del Olmo, se ajuste el Negociado correspondiente a lo establecido en el artículo 3.º de la ley de 29 de julio de 1908, que el solicitante considera compatible con la de Divorcio, dictada en 2 de marzo de 1932, dejando consiguientemente reducida la retención a la quinta parte de los haberes líquidos que percibe el solicitante.

El artículo 100 del Reglamento orgánico de la Dirección general de Clases Pasivas de 21 de julio de 1900, modificado, previo informe del Consejo de Estado y de conformidad con su dictamen mediante Real orden que tiene fecha 28 de octubre de 1918, obliga a la Intervención de este Centro directivo y a las Intervenciones de Hacienda de las provincias, a no traspasar los límites señalados por las leyes que en ese mismo artículo se citan, entre las que se halla la de 29 de julio de 1908, al practicar, en cumplimiento de decisiones judiciales, las reten-

ciones que sean procedentes en los haberes pasivos. El artículo 101 del mismo Reglamento, modificado en la fecha y con las formalidades a que se acaba de hacer alusión, dispone que las pensiones alimenticias que han de ser satisfechas con cargo al haber de los individuos de Clases pasivas se descuenten, cuando hayan de beneficiar a las mujeres e hijos de los interesados, del importe líquido de tales pensiones, una vez hecha en ellas la reducción que corresponda por otras atenciones "excepto—dice—en los casos comprendidos en el artículo 3.º de la ley de 29 de julio de 1908".

Resulta claramente de lo expuesto:

1.º Que la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas y las Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda de las provincias, están obligadas a no traspasar los límites establecidos para la retención de haberes pasivos, aun cuando otra cosa se disponga en las resoluciones judiciales a que hayan de dar cumplimiento.

2.º Que las pensiones alimenticias señaladas por los Tribunales a las mujeres e hijos de los individuos de Clases Pasivas han de ser descontadas del importe líquido que perciben los beneficiarios una vez hecho el descuento de otras retenciones, si las tuviere.

3.º Que del régimen establecido, con carácter general, por el artículo 101 del Reglamento de la Dirección general de Clases Pasivas, reformado en 1918, están exceptuadas y, por consiguiente, no se benefician de él, las mujeres y los hijos de los militares a quienes se imponga la obligación de satisfacer alimentos.

Queda así bien sentado que la Administración no debe limitarse a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales referentes a retenciones de haberes pasivos y especialmente a los que tengan su origen en el señalamiento de



pensiones alimenticias, sino que le está impuesta la obligación de no cumplirlas cuando traspasen los límites legales.

Establece el artículo 100 del Reglamento aludido el procedimiento que se ha de seguir en estos casos y atribuye al Ministerio de Hacienda la facultad de dictar la resolución que corresponda si el Tribunal de que procede la retención, considerada improcedente, insiste en hacerla cumplir. El juego normal de los recursos procesales y el principio de la jurisdicción rogada, que es básico en materia civil, sufre en este caso las excepciones que se indican.

La solicitud formulada por D. Enrique Chaves Rodríguez lleva implícito el planteamiento de estas cuestiones:

Primera. Compatibilidad de los preceptos de la ley de 29 de julio de 1908, declarada en vigor por el artículo 7.º del Decreto de 16 de junio de 1931, ratificado como Ley en 30 de diciembre del mismo año, con los artículos 2.º y 25 de la Constitución de la República.

Segunda. Vigencia de la ley de 29 de julio de 1908, en relación con la de Divorcio de 2 de marzo de 1932.

Tercera. Unificación de criterio en cuanto al alcance de las facultades administrativas referentes al cumplimiento de las decisiones judiciales por las que se señalen alimentos provisionales o definitivos, en los juicios de divorcio.

Cuarta. Posible corrección de las desigualdades de trato jurídico que origina la legislación actual.

La ley de 29 de julio de 1908 establece a favor de los militares y marinos una situación de derecho especial que consagra la inembargabilidad de sus haberes por deudas contractuales y que reduce a la quinta parte la porción retenible de esos mismos haberes en los casos en que queden afectos a responsabilidades que no provengan de contratos, tales como las que se derivan de la obligación de pagar alimentos o de satisfacer indemnizaciones por culpa o negligencia.

La compatibilidad de esta situación excepcional con lo establecido en el artículo 2.º de la Constitución, según el cual todos los españoles son iguales ante la ley, y con lo determinado en el artículo 25 del mismo texto constitucional, según el cual la clase social no puede ser fundamento de privilegio jurídico, se halla implícitamente declarada por el artículo 7.º del Decreto de 16 de junio de 1931, ratificado como Ley en 30 de diciembre del mismo año, que, al reformar los artículos 1.449 y 1.451 de la ley de Enjuiciamiento civil, declaró subsistentes, con carácter excepcional, los preceptos de la ley de 29 de julio de 1908, a la que se ha aludido repetidamente. Parece, sin embargo, conveniente estudiar más a fondo esta compatibilidad en relación con las situaciones particulares a que da origen la aplicación de dicha Ley: estudio que interesa al Ministerio de Hacienda y concretamente a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, en cuanto está llamada a cumplir las obligaciones que le imponen los artículos 100 y 101 de su Reglamento orgánico.

La vigencia de la ley de 29 de julio de 1908, en relación con la de 2 de marzo de 1932, no aparece perfectamente definida. El artículo 32 de la Ley últimamente citada confiere a los Tribunales de Justicia la facultad de reducir o aumentar las pensiones alimenticias que señalen en los juicios de divorcio, según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la situación económica del cónyuge obligado a satisfacerlas. La amplitud de la facultad concedida a los Tribunales por este artículo de la ley del Divorcio, interpretada y relacionada con la disposición final, que designa cuantías lo oportuno

a los preceptos de dicha Ley, puede conducir a la conclusión de que ha desaparecido, para los Jueces y Tribunales, toda limitación para señalar pensiones alimenticias en los pleitos de divorcio, habiendo quedado consiguientemente derogada, en cuanto a este punto, no ya sólo la Ley de 29 de julio de 1908, sino también la base 11 de la Ley de 22 de julio de 1918, que determina el límite de la retención de haberes de los funcionarios civiles. Así lo han entendido muchos Juzgados, que al señalar pensiones de alimentos, en casos de divorcio, disponen que la retención del haber se extienda hasta el límite que sea preciso para dar efectividad a la resolución.

El criterio anteriormente expuesto no es, sin embargo, general, y otros Juzgados entienden que la facultad discrecional que les otorga el artículo 32 de la Ley de 2 de marzo de 1932, es compatible con las limitaciones establecidas por las leyes de 29 de julio de 1908 y 22 de julio de 1918, y por creerlo así disponen que cualquiera que sea la cuantía de la pensión alimenticia que señalan, la retención de haberes de los funcionarios que hayan de pagarlas, activos o pasivos, quede contenida dentro de los límites que las expresadas leyes establecen. Esta diversidad de criterios dificulta notoriamente a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas el cumplimiento de los deberes que le impone el artículo 100 de su Reglamento orgánico y da ante los interesados apariencia de arbitrariedad a su conducta, ya que, ateniéndose siempre a lo dispuesto por la autoridad judicial, practica unas veces con limitación y otras sin ellas, las retenciones que son precisas para hacer efectivas las pensiones de alimentos que se señalan en los juicios de divorcio.

Las confusiones a que puede dar lugar el estado de derecho actual resultan aún mayores, si se considera que el artículo 101 del Reglamento orgánico de la Dirección general de Clases Pasivas establece un régimen especial para las pensiones alimenticias señaladas en favor de las mujeres e hijos de los individuos que perciben sus haberes en concepto de Clases Pasivas del Estado, de lo cual, y teniendo, además, presente los preceptos de la ley del Divorcio, resulta que las pensiones alimenticias que tienen su origen genérico en lo establecido en el título VI del libro I del Código civil, han de ser tratadas de diverso modo, en cuanto produzcan la obligación de retener haberes a funcionarios públicos, según sea el titular del derecho y la situación civil o militar del obligado a pagarlas, de lo que se deduce entre otras anomalías, que serían fáciles de exponer, que mientras en los casos de señalamiento de tales pensiones en juicios de divorcio sin expresa declaración de culpabilidad (párrafo segundo del artículo 30 de la ley de 2 de marzo de 1932) se podrá sostener que la retención para pago de alimentos no tiene límite, en los casos de existencia de esta misma obligación en relación con los ascendientes pobres e impedidos, habrán de hacerse efectivos estos límites sin que sea fácil de percibir la razón que podrá justificar esta diferencia.

En atención a las consideraciones expuestas;

Este Ministerio ha tenido a bien decidir:

1.º Que mientras el Ministerio de Justicia no determine el criterio que se ha de seguir para interpretar los preceptos de la ley del Divorcio de 2 de marzo de 1932 en relación con los establecidos en la de 29 de julio de 1908 y 22 de julio de 1918, se atenga estrictamente la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas y Delegaciones y Subdelegaciones de Hacienda a las decisiones



definitivos en los pleitos de divorcio en cuanto a ella se determine, concretamente, la cuantía de la retención, debiéndose considerar resuelta, en este sentido, con carácter general, la solicitud formulada por D. Enrique Chaves Rodríguez.

2.º Que se dirija atento ruego al Ministerio de Justicia, a fin de que, sin merma ni invasión de las facultades atribuidas a los Tribunales, tenga a bien determinar, a los efectos establecidos en el artículo 100 del Reglamento orgánico de la Dirección general de Clases Pasivas, si la disposición final de la ley de 2 de marzo de 1932 ha derogado, por lo que se refiere a la efectividad de las pensiones alimenticias en los pleitos de divorcio, las leyes de 29 de julio de 1908 y 22 de julio de 1918, que determinan los límites de las retenciones de los haberes de los funcionarios públicos.

3.º Que se invite a los Ministerios de Justicia, Guerra y Marina, a estudiar, si lo consideran procedente, los preceptos de la ley de 21 de julio de 1908 en cuanto pudieran dar lugar a situaciones jurídicas privilegiadas en favor de los militares y marinos para hacer efectivas sus obligaciones contractuales y extracontractuales y especialmente las derivadas de los juicios de divorcio en cuanto hayan de afectar a los haberes que como pertenecientes a las escalas activas o en situación de retirados, perciben del Tesoro público.

Madrid, 27 de julio de 1934.

MANUEL MARRACO..

Señores Ministros de Justicia, Guerra y Marina y Director general de la Deuda y Clases Pasivas.

(De la Gaceta núm. 212.)

## SECCION DE PERSONAL

### Marinería.

Se dispone que el cabo de marinería, de la dotación del crucero *Miguel de Cervantes*, Arturo Manso Camiño cese en su actual destino y pase a la Base Naval Principal de Cartagena, a disposición del Juzgado de instrucción de la expresada Base, como consecuencia de auto de procesamiento dictado contra el citado individuo.

9 de agosto de 1934.

Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.  
Señores...

El Subsecretario,  
Juan M-Delgado.

## SECCION DE INFANTERIA DE MARINA

### Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.

Baja en 18 del anterior, por pase a la situación de retirado el ayudante auxiliar mayor de Infantería de Marina D. Julio García Suárez, siendo ésta la primera vacante ocurrida después de promulgada la ley de 28 de mayo último (D. O. núm. 125), se asciende a sus inmediatos empleos al primer ayudante auxiliar de primera D. José

Moure González, ayudante auxiliar de primera D. Ignacio Herrán Hontoria y ayudante auxiliar de segunda don José Soler Egea, los cuales disfrutarán antigüedad de 19 del mismo mes y efectos administrativos desde la revista del presente mes.

9 de agosto de 1934.

Sr. General Jefe de la Sección de Infantería de Marina.

Señores...

ROCHA.

## SECCION DE MÁQUINAS

### Cuerpo de Maquinistas.

Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán Maquinista D. Jesús Permuy Seijo, en la que solicita dos meses de licencia para asuntos propios en Codeseda (Pontevedra) y Ferrol, este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Sección de Máquinas, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.

10 de agosto de 1934.

El Subsecretario,  
Juan M-Delgado.

Sr. General Jefe de la Sección de Máquinas.  
Señores...

## SECCION DE SANIDAD

### Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.

Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en la escala de oficiales segundos del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada, producida en 8 de marzo del año actual por pase a la reserva del oficial primero D. Antonio Morales de Haro (D. O. núm. 58), este Ministerio ha dispuesto que ascienda a oficial segundo el oficial tercero de dicho Cuerpo D. Santiago Gabundi, número 1 de su escala apto para el ascenso, por haber cumplido todas las condiciones reglamentarias en 6 de julio anterior; correspondiéndole en su nuevo empleo la antigüedad de 9 de marzo del corriente año, fecha inmediata posterior a la de la vacante, y efectos administrativos a partir de 1.º de agosto actual; debiendo ser escalafonado inmediatamente detrás de D. Lorenzo López López. No produce este ascenso vacantes en las escalas inferiores, por haber sido cubiertas con anterioridad, por Orden ministerial de 14 de abril del corriente año (D. O. núm. 102).

9 de agosto de 1934.

ROCHA.

Señor General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada.

Señores...

Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada D. Salvador Mora Moreno en súplica de que se le conceda pasar a los servicios de tierra, este Ministerio,

en vista de lo que se manifiesta en las actas del reconocimiento facultativo efectuado durante seis meses consecutivos y de conformidad con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto acceder a lo solicitado.

8 de agosto de 1934.

El Subsecretario,  
*Juan M-Delgado.*

Sr. General Médico Jefe de los Servicios sanitarios de la Armada.

— o —

## SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL

### Personal.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar Ingeniero industrial de la Inspección General de Buques y Construcción naval a D. Jerónimo Gómez Baeza, con carácter interino, mientras no se celebre el oportuno concurso, y haber anual de 6.000 pesetas, que cobrará con cargo al capítulo correspondiente del presupuesto de esa Subsecretaría de la Marina Civil.

Madrid, 1.º de julio de 1934.

El Ministro, P. D.,  
*J. Pich.*

Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores Generales de Personal y Construcción, Secretario General, Interventor Central y Ordenador de Pagos del Ministerio.

Señores...

— o —

Ilmo. Sr.: Como resultado a instancia elevada por el Auxiliar de Oficinas D. Francisco Besada Nieto, con destino en la Subdelegación de Pesca de Santa Eugenia de Riveira, solicitando un mes de licencia por enfermo, a la que acompaña un certificado médico acreditativo, este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto en el art. 31 y siguientes del Reglamento para aplicación de la ley de Bases para funcionarios de 7 de septiembre de 1918; debiendo durante su ausencia ser sus-

tituído por el Auxiliar destinado en la Puebla del Caraminal quien, sin desatender su actual destino, prestará sus servicios en la Subdelegación de Pesca de Riveira durante quince días alternos en comisión indemnizable.

Madrid, 8 de agosto de 1934.

El Ministro, P. D.,  
*J. Pich.*

Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores Generales de Personal y Navegación y Secretario General. Señores...

— o —

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para tramitar recurso interpuesto ante este Ministerio por D. José Cimián y Díaz sobre el orden de adjudicación de plazas de Maquinistas navales de la Subsecretaría de la Marina Civil, convocadas por Orden ministerial de 15 de diciembre de 1932 (D. O. núm. 297).

Resultando que, aunque los dictámenes obrantes en el expediente tramitado son favorables al recurrente, en las alegaciones y reconocimientos que pide contra la calificación del Tribunal del concurso, que propuso la adjudicación de las citadas plazas.

Considerando que es principio general de Derecho que la Administración no puede volver de sus propios acuerdos sin una previa declaración de lesividad y un fallo del Tribunal de lo Contencioso-administrativo que así lo declare,

Este Ministerio no puede admitir y estimar el recurso interpuesto por el citado funcionario, a quien se le comunica que contra las resoluciones que deniegan o limitan su derecho puede entablar recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo dentro del plazo de tres meses, a contar de la fecha de esta Orden comunicada.

Madrid, 8 de agosto de 1934.

El Ministro, P. D.,  
*J. Pich.*

Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Inspector General de Personal y Secretario General.

Señores...

IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA